comercio

Niña Machiguenga en Timpia, una de las comunidades afectadas directamente por el gasoducto de Camisea en el Perú (ver páginas 26-27).

edición 103

las empresas mandan: ¿quién paga la cuenta?

impactos en la gente y el medio ambiente derivados de la influencia empresarial en la omc

Amigos de la Tierra

CEO
CORPORATE EUROPE OBSERVATORY

Amigos de la Tierra

amigos de la tierra Amigos de la Tierra Internacional (FoEI) es la red de grupos ecologistas de base más importante del mundo, con 68 organizaciones nacionales diversas en igual número de países y algunos 5,000 grupos locales de activistas en todos los continentes. Sumamos en total casi un millón de miembros y adherentes individuales en todo el mundo, y desarrollamos campañas en torno a los problemas ambientales y sociales más urgentes del momento. Nos oponemos al modelo de globalización económica neoliberal predominante, comandado por las empresas transnacionales, y proponemos soluciones que contribuyan a la creación de sociedades ecológicamente sustentables y socialmente justas y equitativas.

corporate europe observatory Corporate Europe Observatory (CEO) es un grupo de investigación y campañas con sede en Europa, cuyo objetivo es denunciar la amenaza que supone el poder económico y político de las empresas corporativas y sus grupos de presión para la democracia, la equidad, la justicia social y el medio ambiente.

amigos de la tierra tiene grupos en Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Benin, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Curazao, Dinamarca, El Salvador, Escocia, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Grenada, Haití, Holanda, Honduras, Hungría, Indonesia, Inglaterra/Gales/Irlanda del Norte, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Malí, Malta, Mauricio, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Togo, Tunez, Ucrania y Uruguay.
(comuníquese con el secretariado de FoEI o consulte nuestro sitio en Internet para la información de contacto de los grupos Amigos de la Tierra)

Publicado en agosto de 2003 en México y Uruguay. ISBN: 90-0914913-9

link
conecta...me!

Infórmate e involúcrate en las campañas ecologistas y sociales más urgentes en todo el mundo suscribiéndote a la serie de publicaciones ***link*** de Amigos de la Tierra Internacional (FoEI)!

tarifas de suscripción [4 ediciones anuales, envío incluido]
individuos y ongs us$30
tercer mundo y grupos locales us$15
empresas us$90

por información sobre formas de pago, por favor escribe al Secretariado Internacional de FoEI

amigos de la tierra
secretariado internacional

P.O. Box 19199
1000 GD Amsterdam
Holanda
Tel: 31 20 622 1369
Fax: 31 20 639 2181
Correo electrónico
info@foei.org
Sitio web: www.foei.org

corporate europe observatory

Paulus Potterstraat 20
1071 DA Amsterdam
Holanda
Tel/Fax: 31 20 612 7023
Correo electrónico:
ceo@corporateeurope.org
Sitio web: www.corporateeurope.org

Equipo editorial Damian Sullivan, Ann Doherty, Ronnie Hall y Olivier Hoedeman

Agradecemos las contribuciones y la colaboración de Corporate Europe Observatory, David Waskow, CENSAT/Amigos de la Tierra Colombia, REDES/Amigos de la Tierra Uruguay, Amigos de la Tierra Europa (FoEE), Amigos de la Tierra Inglaterra/Gales e Irlanda del Norte (FoE EWNI), Food First, Equations India, Médicos Sin Fronteras, Polaris Institute, La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y del Resource Center of the Americas.

las empresas mandan: ¿quién paga la cuenta?

impactos en la gente y el medio ambiente derivados de la influencia empresarial en la omc

introducción

prólogo 4

las empresas mandan: ¿quién paga la cuenta? 5

estudios de caso

obligados a comer alimentos transgénicos el gobierno de estados unidos, la agroindustria y la omc inician batalla alimentaria contra europa 8

maíz contaminado en méxico 10

el escándalo del starlink 11

sabotaje al medio ambiente la omc subordina los acuerdos ambientales a los intereses corporativos empresariales 12

una píldora amarga bloquean el acceso a medicamentos esenciales 14

la shell trae el infierno a méxico tratado de inversiones en la omc amenaza a las comunidades 16

tratado tóxico las lecciones del tlcan/nafta 18

maremoto en la omc las transnacionales del agua quieren ahogar los intereses nacionales 20

¿qué es el gats/agcs? 22

dejan a oscuras al pueblo el gats/agcs y la privatización de la energía 24

ganancias a chorros el gats/agcs es buena noticia para las empresas mundiales como halliburton 26

Aunque solamente revela la punta del iceberg, este informe no deja lugar a dudas acerca de la bancarrota moral del sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Velada tras la retórica del 'comercio basado en reglas', 'liberalización' y el 'Programa de Doha para el Desarrollo', la realidad es que las reglas de comercio e inversiones de la OMC vienen siendo sistemática y coherentemente modeladas en torno a los intereses de las empresas transnacionales, consolidando su expansión mundial y removiendo cualesquier obstáculos restantes.

Hay más de 250 grupos de presión que defienden los intereses corporativos de las empresas transnacionales, que ya obtuvieron acreditación para participar en la Conferencia Ministerial de la OMC en Cancún. Estarán allí presentes para asegurarse que los negociadores no se aparten de las hojas de ruta y agendas afines a las empresas, que traerán consigo a México los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países del Norte. Aun cuando las reuniones cumbre de la OMC son eventos políticos clave, el control empresarial sobre los acuerdos internacionales en materia de comercio deriva no tanto de su presencia masiva en dichas reuniones, sino más bien de las decisiones sistemáticamente sesgadas en favor de los intereses corporativos empresariales que en materia de comercio se adoptan en Washington D.C., Bruselas, Londres y otras capitales de los países industrializados.

Confiamos que este informe sea de utilidad como manual para la acción ciudadana, en Cancún y más aun en las ciudades y comunidades del resto del mundo. La única esperanza de conseguir que el comercio y las inversiones se pongan al servicio de los pueblos y su medio ambiente, es oponerle a las políticas de comercio orientadas por las empresas transnacionales una resistencia civil activa, coherente y enfocada.

corporate europe observatory (ceo)

prólogo

corporate europe observatory y amigos de la tierra internacional

Amigos de la Tierra Internacional (FoEI) realiza campañas en pos de sociedades justas y ambientalmente sustentables que satisfagan las necesidades humanas de toda la población. Para cumplir con nuestros objetivos entendemos necesario combatir la globalización económica neoliberal que nos conduce en la dirección opuesta, impidiendo la sustentabilidad.

Las políticas económicas neoliberales están decepcionando a los pueblos de muchas maneras distintas. Vivimos en un mundo donde día a día crecen la inequidad y las desigualdades, y muchos millones de personas no pueden satisfacer ni siquiera sus necesidades más fundamentales. Las selvas y bosques están siendo arrasados, el subsuelo despojado agresivamente de sus minerales y los combustibles fósiles explotados a ritmos completamente insostenibles, todo para abastecer con materias primas la voracidad de la economía globalizada y sus principales empresas transnacionales. La democracia se esta vaciando a medida que el poder se concentra cada vez en menos manos. La diversidad biológica y cultural está desapareciendo a ritmos alarmantes, y normas sociales y ambientales ganadas con la lucha de los pueblos se ven hoy seriamente amenazadas.

La verdad es que la liberalización del comercio arroja ganadores y perdedores –y los ganadores son las poderosas empresas transnacionales que recorren el mundo entero en busca de nuevos mercados, competidores débiles, recursos baratos y menores costos operativos. Estas empresas cuyo poder y tamaño se multiplica pueden influir en los gobiernos, y de hecho así lo hacen, para que cambien las reglas de la economía mundial a favor suyo y a costa de la gente, las economías locales y el medio ambiente. Amigos de la Tierra estima que ahora es el momento de examinar de cerca los vínculos entre las transnacionales y el comercio para así determinar quién se beneficia y de qué modo. Esta publicación es un primer paso en esa dirección. ¡No dejemos que las grandes empresas gobiernen el mundo!

Ricardo Navarro, Presidente, Amigos de la Tierra Internacional (FoEI)

Comunidad inundada por el río Zambezi en Mozambique en 2001.

las empresas mandan: ¿quién paga la cuenta?

A través de una serie de estudios de caso, esta publicación pone de manifiesto la poderosa influencia de las corporaciones empresariales en los procesos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las grandes empresas tienen acceso privilegiado a los negociadores comerciales, y esto ha dado como resultado un conjunto de normas y tratados comerciales que benefician directamente a las empresas comerciales transnacionales –a menudo a costa de las comunidades locales y las pequeñas empresas, así como de las futuras generaciones y el medio ambiente.

Según el sesgo de la OMC, todos ganamos con el 'libre comercio'. Ricos y pobres, quienes viven en el Norte global y en el Sur, todos se benefician con la eliminación de las barreras comerciales impuesta por la OMC y los tratados de comercio regionales como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los gobiernos pro 'libre comercio' sostienen básicamente que lo que es bueno para las grandes empresas también ha de ser bueno para la gente y su ambiente.

La realidad es sumamente distinta: muy a menudo las comunidades y el ambiente son quienes pierden con la 'liberalización' del comercio. Los intereses de las comunidades son ignorados en la medida en que ellas no tienen acceso a los negociadores que deciden las reglas y los acuerdos, y el ambiente pierde ya que la protección de nuestros recursos naturales es percibida como un asunto menos importante que el comercio internacional y los flujos de inversión.

Al interior de la OMC los actores más poderosos son Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Las empresas transnacionales tienen acceso directo a los tres, especialmente a través de sus influyentes grupos de presión corporativos. El gran poderío económico y político de esas empresas, combinado con la posición y el lugar que les confieren los 'liberalizadores', les permite influir tanto al Secretariado de la OMC como a los gobiernos clave, promoviendo reglas que protejan y promuevan sus intereses.

una mirada detrás del telón: corporaciones empresariales y omc

Los estudios de caso que presentamos a continuación demuestran cómo las empresas contribuyen efectivamente a la construcción de acuerdos de la OMC que tienen impactos perjudiciales sobre la gente y sus ambientes. Entre las transnacionales presentadas en esta publicación se destacan Pfizer, Suez, Halliburton, Monsanto y Exxon Mobil. Algunos de los grupos de presión empresarial incluidos aquí son la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por su sigla en inglés), Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) [Fabricantes e Investigadores Farmacéuticos de América], la Biotechnology Industry Organization (BIO), el European Services Forum (ESF, el Foro Europeo de Servicios), la Coalición de Industrias de Servicios de Estados Unidos (USCSI, por su sigla en inglés), el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC, por su sigla en inglés) y la American Farm Bureau Federation (AFBF).

Nos centramos aquí en los impactos de estas empresas y grupos de presión en cuatro áreas clave para la gente y el medio ambiente: alimentación, salud y normas ambientales; acceso a medicamentos esenciales; control de la inversión extranjera; y prestación de servicios esenciales.

La disputa en la OMC sobre los alimentos transgénicos o genéticamente modificados pone de relieve una batalla más amplia, asociada a la libertad de opción de los países en materia de normas y reglamentaciones relativas a la salud, el medio ambiente y la alimentación, y por ende a su derecho a rechazar las importaciones de alimentos en conformidad con esas decisiones. En lo que hace a los medicamentos, examinamos la exitosa campaña de la industria farmacéutica que utilizó a la OMC para restringir el acceso a medicamentos esenciales en el Sur. Con respecto a las inversiones, la experiencia de las comunidades bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por su sigla en inglés) plantea serias dudas acerca de la conveniencia de ampliar el mandato de la OMC para que incluya un acuerdo que le quitará a las comunidades el control de las inversiones de capital en su región. Por último, la 'liberalización' de los servicios a través del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, mejor conocido como GATS por su sigla en inglés), constituye un ejemplo excepcional de la manera en que las empresas efectivamente están influyendo con éxito en la OMC, a costa de las comunidades locales y de su acceso a servicios esenciales como el agua y la electricidad.

socavando la alimentación y el medio ambiente

Los agricultores y consumidores europeos y del mundo entero serán los peores perjudicados si Estados Unidos tiene éxito en su campaña de presión para obligar al mundo a alimentarse con transgénicos. El grupo de presión de las empresas agroalimentarias de Estados Unidos, que incluye a gigantes como la Monsanto y la American Farm Bureau Federation (AFBF), está presionando al gobierno estadounidense para que impugne ante la OMC las restricciones que impuso la Unión Europea para los transgénicos. Los estudios de caso sobre el escándalo del maíz Starlink y la contaminación del maíz en México, ponen de manifiesto la necesidad de establecer prioritariamente medidas precautorias severas tanto en el ámbito nacional como internacional, y la necesidad de protegerlas de los ataques de los intereses comerciales.

Por otra parte, los grupos de presión empresariales también están apoyando la campaña de algunos gobiernos que pretenden utilizar la OMC para debilitar los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente (AMUMA), en una movida que pone en riesgo la eficacia de las acciones internacionales para combatir el cambio climático. Los grupos de presión empresarial estadounidenses, en particular, además están encabezando una iniciativa de campaña que pretende utilizar a la OMC para socavar el principio precautorio, el cual constituye un aspecto clave de las buenas políticas ambientales. Están en juego la aplicación del Protocolo de Bioseguridad recientemente ratificado, y una serie de normas nacionales en materia de alimentación y salud diseñadas para proteger a los consumidores y el medio ambiente.

limitando el acceso a los medicamentos

El acceso a los medicamentos es fundamental para el cuidado de la salud humana. Por eso la decisión de la OMC de garantizar el acceso a

Manifestaciones de protesta contra la privatización del agua en Cochabamba, Bolivia.

medicamentos esenciales debe ser aplaudida. Sin embargo, el cabildeo posterior de la poderosa industria farmacéutica consiguió restringir las reformas, a consecuencia de los cual habrá mucha gente en el Sur que no tendrá acceso a los medicamentos que necesita.

presionando por un tratado de inversiones

Nuestras preocupaciones acerca de la propuesta de establecer un acuerdo de inversiones en la OMC quedan manifiestas en la descripción de la experiencia de las comunidades que viven a lo largo de la maravillosa costa Baja en México. Sus medios de vida, que dependen del turismo, están amenazados por un gran proyecto gasífero de la Shell. Este proyecto destruirá la belleza natural de la zona y también pondrá en peligro a la población local de ballenas grises. Los riesgos que supone un acuerdo de inversiones en el marco de la OMC también son evidentes en las poderosas cláusulas del Capítulo 11 del TLCAN/NAFTA sobre inversiones, a las cuales amenaza recurrir la gigantesca empresa tabacalera PhilipMorris como parte de su exitosa campaña para bloquear las enmiendas a las leyes canadienses de etiquetado del tabaco. Tanto Shell como Philip Morris son miembros activos de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), uno de los principales voceros e impulsores de un acuerdo de inversiones en la OMC.

'liberalizando' los servicios en todo el mundo

Los impactos potencialmente devastadores de la 'liberalización' de los servicios se hacen evidentes en las experiencias de muchas comunidades. En Uruguay, la población está sufriendo con el incremento exponencial de las tarifas de servicio y la mala calidad del agua como resultado de la privatización de los servicios de agua potable ahora operados por Suez. En Bogotá, Colombia, un sistema de energía privatizado y operado por Endesa está atravesando problemas similares de crecientes deficiencias en la prestación del servicio. En Perú, el proyecto gasífero Camisea de la empresa Halliburton está amenazando la calidad de vida y el bienestar de los Pueblos Indígenas locales, así como un área ecológica sumamente sensible. A través de los grupos de presión empresariales, todas estas empresas han sido patrocinadoras explícitas de los llamados a la 'liberalización' de los servicios en las negociaciones del GATS/AGCS en la OMC.

¡no más nuevas negociaciones!

Esta publicación resalta solamente una pequeña selección de los problemas e historias de devastación que han provocado algunos de los acuerdos de 'libre comercio' vigentes. En otras publicaciones hemos examinado otros problemas fundamentales asociados al programa de 'liberalización' del comercio (ver www.foei.org y www.corporateeurope.org). Amigos de la Tierra Internacional (FoEI) y Corporate Europe Observatory estimamos que ya hay suficiente evidencia que justifica detener la continuación de las negociaciones y exigir una evaluación independiente de los impactos del 'libre comercio'. Hacemos un llamado a los gobiernos para que reconsideren el actual sistema económico y la forma en que medimos el bienestar, y para que se comprometan a garantizar el control democrático de nuestras economías.

"Las empresas de biotecnología están ejerciendo mucha presión internacional para que se autorice la introducción de cultivos y semillas transgénicas en este país. Presionan a la Unión Europea a través de los gobiernos nacionales y en la Organización Mundial del Comercio."

Elliot Morley, Ministro de Asuntos Rurales del Reino Unido, The Guardian, 20 de agosto de 2002.

Presidente estadounidense George W. Bush en uso de la palabra en la conferencia "BIO 2003" respaldada por los grupos de presión de la industria biotecnológica.

obligados a comer alimentos transgénicos

el gobierno de estados unidos, la agroindustria y la omc inician batalla alimentaria contra europa

Tanto los consumidores como los agricultores de la Unión Europea abogan firmemente por alimentos libres de transgénicos, pero poderosos intereses agroindustriales entre los que se cuenta Monsanto y a la American Farm Bureau Federation han estado presionando al gobierno de Estados Unidos para que utilice a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para forzar la introducción de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) en el hostil mercado consumidor de la Unión Europea.

La Unión Europea aplica desde 1998 una moratoria de facto para la aprobación de cultivos y alimentos transgénicos. Dicha moratoria se estableció para permitir que la Unión Europea desarrollase una normativa general y exhaustiva sobre los experimentos y pruebas con OGMs, su comercialización, etiquetado y trazabilidad en la cadena alimentaria. Esa legislación fundada en el "principio precautorio" (ver página 13) fue una respuesta importante a la preocupación pública creciente con respecto a los posibles riesgos sanitarios y ambientales de esta nueva tecnología (ver ejemplos en páginas 10 y 11) y la pérdida potencial de derechos de elección para los consumidores. Pero la agroindustria estadounidense no abandonará sus pretensiones de acceso a los mercados de la Unión Europea sin dar la batalla, y por eso está usando el mecanismo de solución de diferencias de la OMC para obligar a la Unión Europea a abrir sus mercados a los productos transgénicos.

monsanto manda en el campo

Monsanto es el mayor productor de OGMs en el mundo: el 90% de los 140 millones de acres bajo cultivo con transgénicos en todo el mundo fueron sembrados con semillas de maíz y soya y los insumos químicos de esa empresa. Las ganancias de Monsanto y otras empresas de biotecnología dependen en gran medida de su aceptación entre los consumidores. Esas compañías reclaman que han dejado de percibir aproximadamente U$S 300 millones por concepto de oportunidades de exportación hacia Europa perdidas en virtud de la moratoria impuesta por la Unión Europea.

Esta batalla no incumbe solamente a Europa: los consumidores y agricultores del mundo entero reclaman control local sobre los alimentos y la agricultura. El ejemplo reciente de los países del sur del África y de otros lugares que rechazaron la ayuda alimentaria con alimentos contaminados por OGMs muestran el repudio creciente que suscitan los intentos de Estados Unidos de forzar la introducción de los transgénicos sobre un público mundial que no está dispuesto a aceptarlos.

Monsanto participa activamente en todos los grandes grupos de presión de la agroindustria y las empresas de biotecnología de los Estados Unidos, incluyendo BIO, el US Grains Council (Consejo de Granos de los Estados Unidos) y la Food Industry Codex Coalition (Coalición de la Industria Alimentaria para el Codex). Todos estos grupos de presión se oponen a la postura proteccionista de la Unión Europea con respecto a los transgénicos: BIO se queja de que la moratoria "amenaza la viabilidad del sistema mundial de comercio" y el Consejo de Granos y la Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz urgieron al gobierno de Estados Unidos a entablar una disputa en la OMC contra la Unión Europea debido a su postura "histérica" frente a los transgénicos. Monsanto también es miembro de Europabio, el principal grupo de presión de la industria biotecnológica europea, que plantea que la moratoria es "indefendible".

Monsanto cuenta con la American Farm Bureau Federation (AFBF) como aliado cercano y poderoso. La AFBF figura en la revista Fortune como una de las organizaciones más poderosas en Washington. A pesar de cultivar una imagen como "organización de base de los agricultores", la AFBF tiene fuertes vínculos corporativos empresariales y sus posturas políticas reflejan las preocupaciones de las grandes empresas agroindustriales. La AFBF ha presionado repetidamente al gobierno estadounidense para que emprenda acciones en la OMC contra las políticas de la Unión Europea respecto a los transgénicos.

La influencia de Monsanto en las altas esferas del gobierno de Estados Unidos se sustenta y refuerza con el intercambio constante de funcionarios que circulan a través de una "puerta a vaivén" entre la industria y el gobierno. Por ejemplo, Michael (Mickey) Cantor, previamente secretario del Ministerio de Comercio de los Estados Unidos y ex Representante Comercial de Estados Unidos es ahora miembro de la Junta Directiva de Monsanto. Michael Taylor, que había trabajado antes como abogado de Monsanto, oficiaba como Diputado Comisionado en la USFDA cuando ésta aprobó de forma por demás controvertida la hormona BST de Monsanto para aumentar la producción de leche en las vacas, y luego volvió a los cuarteles de Monsanto para ocupar un cargo como Vicepresidente. Estos vínculos no se limitan únicamente al gobierno de los Estados Unidos: el Consejero principal de Monsanto, Rufus Yerxa, fue designado como diputado del Director General de la OMC en agosto de 2002. El Financial

amistando con quienes deciden

En vista de las ganancias que se encuentran en juego no es sorprendente descubrir que Monsanto y los grupos de presión agroindustriales de los Estados Unidos han hecho un esfuerzo concertado para asegurarse que el gobierno estadounidense proteja sus intereses corporativos empresariales.

En los Estados Unidos, los vínculos estrechos de Monsanto con el gobierno son el fruto de dineros bien gastados: en el año 2000 la compañía gastó U$S 2,002,000 en cabildeo y repartió generosas prebendas entre políticos ubicados estratégicamente. Tal generosidad parece haber sido retribuida con acceso directo para Monsanto a los funcionarios de gobierno y los negociadores de los Estados Unidos, así como con representación en el Comité Consultivo de Política Agrícola para el Comercio y en el Panel Consultivo sobre Biotecnología de la Food and Drug Administration estadounidense (USFDA).

Times describió a Yerxa como "... justo el hombre que necesitará (el Director General de la OMC) en caso que Estados Unidos decida quejarse ante la OMC por las restricciones de la Unión Europea para los alimentos transgénicos".

Estos vínculos familiares entre Monsanto, el gobierno de los Estados Unidos y la OMC sin duda facilitaron la puesta en marcha de la disputa actual de los Estados Unidos con la Unión Europea en torno a los transgénicos. El anuncio público de la guerra comercial llevaba impresas por doquier las huellas de Monsanto: varios de los oradores en la conferencia de prensa están ligados a Monsanto, incluido el supuesto "pequeño granjero" de Sudáfrica que generalmente habla en nombre de Monsanto en distintos eventos a favor de la biotecnología. Tácticas como esta son ofensivas para los auténticos pequeños agricultores, así como para los consumidores del mundo, que serán los verdaderos perdedores si se permite que los intereses empresariales prevalezcan en esta disputa alimentaria.

"Este es el caso más grave de contaminación transgénica en el mundo, porque tuvo lugar en el centro de origen de uno de los cultivos más importantes. Está confirmado. No caben dudas al respecto."

Jorge Soberón, secretario de la Comisión Nacional de Biodiversidad de México, abril de 2002.

maíz contaminado en méxico

La contaminación de maíz en Oaxaca, México, pone de manifiesto la amenaza real que suponen los cultivos transgénicos y los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) para el medio ambiente. Las normas gubernamentales para prevenir la contaminación ambiental por OGM muy seguramente serán impugnadas por los Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio.

La contaminación de maíz nativo en su propio centro de origen en Oaxaca, México, con variedades de maíz transgénico fue confirmada en septiembre de 2001. Según un informe publicado por Food First , redactado por el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC), "La contaminación tuvo lugar en una de las reservas de material genético más valiosas del mundo para el mejoramiento vegetal, en uno de los cimientos de la seguridad alimentaria mundial."

México estableció y aplica desde 1998 una moratoria para la siembra de maíz transgénico. Sin embargo se siguió importando maíz transgénico desde los Estados Unidos, y es probable que los agricultores ni siquiera supieran que estaban plantando semillas genéticamente modificadas. Tal como afirma Olga Toro Maldonado, una agricultora de Oaxaca: "Nadie nos advirtió que no debíamos plantar esas semillas."

Según el informe de Food First, esta contaminación genética implica "serios riesgos potenciales" que no han sido estudiados cabalmente ni de manera independiente, tales como posibles efectos en las variedades locales de maíz como resultado de la polinización cruzada con plantas genéticamente modificadas; los enormes e inexplorados riesgos que puede implicar la ingesta de alimentos transgénicos para la salud; y potenciales problemas ecológicos y de manejo de los cultivos, que pueden presentarse en la medida que los rasgos modificados de los cultivos transgénicos se transfieren sin control a los parientes silvestres de esos cultivos. La contaminación podría también exponer a los agricultores mexicanos al riesgo de juicios civiles por infringir patentes monopólicas, y podría poner asimismo en riesgo posibilidades futuras de exportación de maíz no infectado a los mercados libres de transgénicos de Europa y otros destinos.

más información:
Food First: ***www.foodfirst.org/media/press/2002/geneticpollution.html***

"Qué tendrán para decir nuestros consumidores cuando ni la FDA, ni la EPA ni el USDA están allí, pero Amigos de la Tierra se entera de esto? Qué tipo de sistema regulatorio es éste?"

Senador de los Estados Unidos Tom Harkin, 26 de septiembre de 2000, en una reunión de emergencia del Senado sobre inocuidad de los alimentos transgénicos.

el escándalo del starlink

La contaminación con maíz StarLink es el antídoto perfecto para un exceso de confianza en las normas de seguridad relativas a los transgénicos. Este cultivo genéticamente modificado nunca estuvo destinado al consumo humano; pero debido a la fallas en la reglamentación, el maíz StarLink terminó como ingrediente en miles de productos alimenticios de consumo popular.

En septiembre de 2000 Amigos de la Tierra, como parte de una coalición de alerta alimentaria transgénica, encomendó exámenes de laboratorio de las populares tortillas tostadas de maíz de la marca Taco Bell, y constató que estaban contaminadas con productos genéticamente manipulados no aptos para el consumo humano. El descubrimiento del maíz contaminado determinó que muchos productos se retiraran inmediatamente del mercado en todo el país, así como una caída en el precio del maíz estadounidense y la caída de las exportaciones al Japón.

En los años siguientes a la denuncia inicial que reveló la contaminación con StarLink se resolvieron varias demandas judiciales que implicaron el pago de indemnizaciones multimillonarias en dólares. Aventis Crop Science y otras empresas fabricantes de alimentos, entre ellas Kraft Foods Inc, acordaron pagar U$S 9 millones a los consumidores que entablaron en su contra una demanda judicial en grupo alegando que el maíz transgénico StarLink les había provocado reacciones alérgicas. En otro caso, StarLink Logistics y Advanta USA acordaron pagar U$S 110 millones a agricultores cuyas cosechas se vieron contaminadas por el maíz StarLink, o que fueron víctimas de la caída de precios del maíz asociada al incidente con el StarLink.

Es alarmante que las normas estadounidenses que supuestamente protegían contra la contaminación por productos tales como el StarLink hallan fallado tan estrepitosamente. Además, el maíz StarLink no solo afectó a los consumidores en Estados Unidos: en diciembre de 2002, casi un año después de la contaminación inicial, investigadores japoneses descubrieron StarLink en un embarque de maíz procedente de Estados Unidos que iba rumbo a Tokio para ser consumido allí como alimento. Asimismo se descubrió contaminación con StarLink en Corea del Sur y en un cargamento de ayuda alimentaria de Estados Unidos embarcado hacia Bolivia.

El escándalo del StarLink debe servir como un llamado de atención contra el exceso de confianza en las promesas de tranquilidad que nos venden las empresas con relación a la inocuidad de los productos transgénicos, y como alerta sobre la necesidad de normas adecuadas para regular todo lo que atañe a los transgénicos y los OGM.

más información:
Amigos de la Tierra de Estados Unidos: ***www.foe.org/safefood/***

aumentando, y sus consecuencias en la vida real son cada vez más graves. Las inundaciones en el sur del África en el 2000, por ejemplo, dejaron como saldo cientos de muertos y más de 1.25 millones de personas sin techo. En mayo de 2003 se registraron un máximo total de 562 tornados que azotaron a los Estados Unidos con un saldo de 41 muertos.

Aun con todas sus fallas e imperfecciones, el Convenio Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (UNFCC, por su sigla en inglés) y el Protocolo de Kyoto, que fueron el resultado de varios años de negociaciones multilaterales entre los gobiernos en el ámbito de las Naciones Unidas, constituyen sin embargo un punto de partida para combatir el peligroso cambio climático. A pesar que el Protocolo aún no fue ratificado (entrará en vigor cuando Rusia, que ha expresado su apoyo al acuerdo, finalmente lo firme), Arabia Saudita y poderosas compañías petroleras como Aramco Saudi ya han intentado erosionarlo en la OMC. Plantean que los subsidios a las energías renovables constituyen una discriminación contra otras fuentes de energía, y critican el énfasis puesto en la reducción del consumo doméstico de energía en los países desarrollados. La utilización de la OMC como foro para debilitar el Protocolo de Kyoto es un presagio de futuros conflictos entre los intereses comerciales y del medio ambiente.

protocolo de bioseguridad amenazado

Otro acuerdo ambiental que es fruto de más de diez años de negociaciones y campañas a su favor es el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, que entrará en vigor en septiembre de 2003. El Protocolo de Bioseguridad tiene como objetivo proteger a la diversidad biológica de los riesgos potenciales que suponen los organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos, y habilita a los países a prohibir o restringir su importación y uso.

sabotaje al medio ambiente

la omc subordina los acuerdos ambientales a los intereses corporativos empresariales

En virtud de una decisión que se asemeja a poner al lobo a cuidar el gallinero, un comité de la Organización Mundial del Comercio (OMC) quedó encargado y se está ocupando de definir la relación entre los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA) y las reglas de comercio que administra la OMC. A menos que se consiga descarrilar este proceso, habrá aspectos clave de los acuerdos ambientales multilaterales que quedarán supeditados a las reglas del comercio. El avance de estas negociaciones significará la institucionalización y legitimación de una campaña mundial de las empresas que hoy tienen como cometido socavar las reglamentaciones ambientales internacionales, tal como quedó en evidencia con los ataques de la industria petrolera contra el Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático, y las pretensiones de los grupos de presión de las empresas de biotecnología que buscan poner en entredicho los acuerdos y normas que protegen a la población y al medio ambiente de la amenaza de los transgénicos.

sacan al clima de la mesa de negociaciones

A pesar que los acuerdos ambientales multilaterales pueden parecer distantes de la vida de los pueblos y la gente, en verdad tienen efectos muy reales. Consideremos por ejemplo el Protocolo de Kyoto, cuyo propósito es contener y limitar los impactos del cambio climático global. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de las Naciones Unidas, una cantidad inédita de eventos climáticos extremos tales como inundaciones, tornados, olas de calor, incendios forestales y sequías están asociados al cambio climático global. La frecuencia y severidad de esos eventos está

Fundado en el principio precautorio (ver página siguiente), el Protocolo de Bioseguridad tiende a ser conflictivo para los intereses comerciales. Como resultado de la presión intensa que ejerció Estados Unidos en todo el transcurso de las negociaciones, el acuerdo final incluye formulaciones contradictorias acerca de la relación entre dicho tratado y la OMC: por un lado afirma que el Protocolo no debe aplicarse a los derechos y obligaciones vigentes bajo otros acuerdos existentes, pero el texto también dice que con esto "no se pretende subordinar este protocolo a otros acuerdos internacionales".

Con la entrada en vigor inminente del Protocolo de Bioseguridad, se especula profusamente que sus signatarios podrían estar expuestos a demandas en la OMC referidas a la aplicación de medidas contempladas en ese protocolo en el ámbito nacional. Estados Unidos ya entabló una demanda contra la moratoria que aplica la Unión Europea para los transgénicos (ver página 8), pero ésta bien puede ser solamente la punta del iceberg de lo que se avecina en términos de juicios y demandas contra los países que pretendan establecer políticas ambientales y sociales que interfieren con los intereses empresariales.

"resolver" los problemas ambientales en la omc

Hasta ahora los grupos de presión empresariales se han visto obligados a encarar caso a caso sus ataques contra las regulaciones ambientales y el principio precautorio (ver abajo). Desde luego, su tarea sería mucho más sencilla si las reglas de la OMC simplemente primaran sobre los Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente (AMUMA), y los grupos de presión empresariales han asumido ese desafío con gusto y entusiasmo

A juzgar por el modo en que se están desarrollando las negociaciones acerca de las relaciones entre la OMC y los AMUMA (que tienen lugar en el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC), todo indica que la OMC muy posiblemente llegará a un acuerdo que asegure la primacía de sus propias reglas de comercio por encima de los acuerdos ambientales. En especial, existe el grave riesgo que las negociaciones habiliten a la OMC a decidir cuáles medidas comerciales pueden incluirse en un AMUMA y cuáles no, o incluso cuáles pueden aplicarse a nivel nacional para ejecutar el mandato y los objetivos de un AMUMA y cuáles no, restringiendo así el derecho de los gobiernos a legislar en favor del medio ambiente. Los empresarios e industriales seguirán presionando para que las reglas del comercio predominen sobre los acuerdos ambientales como el Protocolo de Bioseguridad y el Protocolo de Kyoto.

Tomemos por ejemplo el Comité Consultivo Económico e Industrial (BIAC, por su sigla en inglés) de la OCDE. Como vocero oficial del sector empresarial ante la OCDE, el BIAC goza de amplias oportunidades para influir en las políticas de los países miembros de la OCDE. El Comité de Medio Ambiente del BIAC está presidido por Suez, la gigantesca multinacional francesa del agua; Monsanto, Pfizer y BASF comparten la vicepresidencia de su Comité de Biotecnología; DuPont preside el Comité de Comercio y la Shell ocupa la vicepresidencia de su Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático.

Los 38 grandes grupos de presión empresarial que integran el BIAC apoyan por consenso las negociaciones de la OMC acerca de los AMUMA, lo cual efectivamente significa subordinar las medidas comerciales de los AMUMA a las reglas de la OMC. También se oponen enérgicamente a cualquier intento de introducir medidas precautorias en la OMC. Amigos de la Tierra y otros movimientos sociales y ecologistas reclaman que las negociaciones acerca de la relación entre las normas comerciales y los acuerdos ambientales se transfiera a la esfera de la ONU, en lugar de abordarse en el ámbito de la OMC dominado por los intereses corporativos empresariales.

sacar al clima de la mesa de negociaciones

Las sórdidas acciones de Exxon Mobil para minar el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto resultante han sido ampliamente denunciadas y desacreditadas. Exxon Mobil contribuyó de manera decisiva a las posturas y actividades de la Global Climate Coalition (GCC), la organización marioneta empresarial que asumió un papel de liderazgo en sabotear las iniciativas para resolver la problemática del calentamiento global. La denuncia de Amigos de la Tierra en 2002 responsabilizando a Exxon Mobil por la negativa de Estados Unidos a firmar el Protocolo de Kyoto estuvo sustentada en una carta filtrada de la Exxon Mobil al Presidente Bush. Refiriéndose a las negociaciones de la entonces próxima Cumbre de la Tierra, la carta decía que: "... el problema ambiental menos importante a nivel mundial es el posible recalentamiento de la tierra, y esperamos que sus negociadores en Johannesburgo puedan mantener el tema fuera de la mesa de negociaciones y del foco de atención pública."

tirar por la borda el principio precautorio

Algunos de los 'meros meros' del cabildeo empresarial estadounidense –el Consejo Nacional de Comercio Exterior, la Cámara Internacional de Comercio (ICC), la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Biotechnology Industry Organization (BIO)- están empeñados en erosionar el "principio precautorio", que es uno de los componentes fundamentales de los acuerdos internacionales sobre el medio ambiente y de las políticas ambientales nacionales, para sustituirlo con lo que ellos denominan "ciencia firme".

más información:
Publicaciones de FoEI sobre comercio: ***www.foei.org/cancun***
Campaña de FoEI sobre el clima: ***www.foei.org/climate***
Campaña de FoEI sobre OGMs: ***www.foei.org/gmo***
Stop Esso: ***www.stopesso.com***

El principio precautorio sostiene que los gobiernos pueden restringir o prohibir las actividades potencialmente peligrosas basándose en la incertidumbre y sin necesidad de proporcionar evidencia científica concluyente que indique que pueden ocurrir daños. La llamada "ciencia firme" por su parte, le daría mucha mayor libertad de acción a las empresas, especialmente en aquellos casos que los impactos negativos no pueden comprobarse de antemano. El principio precautorio constituye el fundamento de un abanico de políticas que incluye desde las normas sobre cuarentena dispuestas por muchos gobiernos nacionales, hasta la legislación de la Unión Europea en materia de transgénicos.

Las reglas de la OMC son un instrumento efectivo a disposición de los grupos de presión empresariales para socavar el principio precautorio, en la medida que dichas reglas los habilita a argumentar que las medidas ambientales restringen el comercio más de lo necesario y por ende contradicen los acuerdos de la OMC.

El Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC, por su sigla en inglés) –un grupo de presión con sede en Washington entre cuyos miembros figura el saboteador del tratado sobre el clima Exxon Mobil, las empresas Bechtel y Halliburton que ganaron los contratos de reconstrucción de Irak tras la invasión de Estados Unidos a ese país (ver página 26), el Citigroup, Microsoft, Pfizer (ver página 14) y la compañía de relaciones públicas Hill & Knowlton—gastó en el año 2000 más de U$S 1.8 millones en cabildeo dedicado a las políticas de comercio.

El NFTC causó gran sensación en el 2003 con su informe titulado "Mirando detrás del Telón: El Aumento de Barreras Comerciales que No Hacen Caso a la Ciencia Firme", donde plantea que hay que neutralizar y oponerse a la moratoria de la Unión Europea para los transgénicos, así como a las leyes que disponen etiquetar y rastrear los productos transgénicos. El informe también reivindica que se invalide la cuarentena requerida por Japón y Corea para los productos frescos y las frutas y nueces procesadas; que se eliminen las leyes que prohíben el uso de diversos aditivos alimentarios en muchos países; que se anule la legislación de la Unión Europea sobre sustancias químicas, y que se revoquen toda otra gama de políticas y medidas ambientales y en materia de salud. El informe recibió gran respaldo del gobierno de Estados Unidos, y los funcionarios del Departamento de Comercio de Estados Unidos estaban aparentemente tan impresionados por las ideas que exponía que decidieron colgarlo en un lugar destacado de su sitio en la Internet.

No es sorpresa que la Cámara Internacional de Comercio (ICC), el grupo de presión empresarial corporativa más poderoso del mundo, sea enemigo declarado del principio precautorio. En una reunión con el Presidente francés Jacques Chirac en mayo de 2003, mientras éste oficiaba como anfitrión de la entonces próxima Cumbre del G8, la ICC lo instó a que apoyase la biotecnología y la "investigación científica firme y el uso razonable de la precaución". La empatía con las preocupaciones genuinas de miles de agricultores de la Unión Europea y millones de consumidores no figura entre los enfoques de ese grupo de presión: la Secretaria General de la ICC, Maria Livanos Cattaui se refirió a la moratoria de la Unión Europea sobre los alimentos transgénicos como un "exceso absolutista".

Médico integrante de Médicos Sin Fronteras tomando muestra cutánea de un hombre peruano enfermo de leishmaniasis; paciente con SIDA en Kenya; víctima de la tuberculosis en Camboya (página siguiente).

"Nuestro esfuerzo combinado nos permitió establecer una red global público-privada que sentó las bases para aquello que luego se convirtió en el acuerdo sobre los ADPIC."

Edmund Pratt, ex Director Ejecutivo de Pfizer.

una píldora amarga

bloquean el acceso a medicamentos esenciales

Todos los días hay decenas de miles de personas que sufren por enfermedades curables o tratables como el VIH/SIDA, la malaria o paludismo, la tuberculosis, las enfermedades cardiovasculares y la neumonía. El acuerdo de la OMC sobre los ADPIC constituye un obstáculo importante para el suministro de medicamentos esenciales que podrían salvar muchas vidas en los países en desarrollo.

desampara a los necesitados

El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, mejor conocido como TRIPS por su sigla en inglés) en gran medida fue adoptado gracias a la presión que ejercieron las empresas estadounidenses, particularmente las del sector farmacéutico, ansiosas de proteger sus ganancias bloqueando la distribución de medicamentos "genéricos" baratos.

Las medicamentos conocidos como "genéricos" son copias de medicamentos de "marca registrada" desarrollados y patentados por compañías farmacéuticas. Al imponer derechos monopólicos que se extienden por 20 años para los productos farmacéuticos, el acuerdo sobre los ADPIC torna de hecho inaccesibles los medicamentos baratos para aquellos que más los necesitan. Los tratamientos se tornan mas costosos, y las posibilidades de controlar o curar las enfermedades disminuyen significativamente, especialmente entre los segmentos más empobrecidos de la población.

Tras las protestas generalizadas de la sociedad civil y los representantes de los países en desarrollo contra esa política, los países miembros de la OMC acordaron en la Conferencia Ministerial de Doha en 2001 un compromiso que invalidaría las patentes para hacer más accesibles los medicamentos. Después de ese momento, sin embargo, los gobiernos poderosos –particularmente los Estados Unidos- dieron marcha atrás y se han dedicado a debilitar ese compromiso. Un vistazo detrás del telón deja en evidencia que las compañías farmacéuticas y sus grupos de presión están usando su gran influencia en las altas esferas del poder para mantenerse en control del suministro de medicamentos.

Haciendo eco a los reclamos del cabildeo farmacéutico, el gobierno de Estados Unidos está planteando que las patentes sólo deben ser invalidadas en caso de "crisis de salud pública". De hecho, estas son buenas noticias para aquellos que necesitan medicamentos para tratarse el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis. Sin embargo el tratamiento de la neumonía, que mata más de un millón de personas cada año en África y contra la cual se patentó una vacuna en los Estados Unidos, podría no quedar exonerado de patentes si el gobierno de los Estados Unidos y los grupos de presión consiguen restringir el número de enfermedades para las cuales se habilita la distribución de medicamentos genéricos. Quedarían asimismo fuera del compromiso los medicamentos para tratar enfermedades cardiovasculares, la tercer causa de muerte en el África. Pfizer cosecha inmensas ganancias con sus medicamentos cardiovasculares patentados: Lipitor, por ejemplo, es el medicamento más vendido en el mundo con ventas anuales superiores a los U$S 6,000 millones.

proveedores de esa amarga píldora

Las compañías farmacéuticas han tejido una red de influencias muy sofisticada y sumamente efectiva, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial. La clave del poder que detentan es su poderío económico creciente: el valor combinado de las cinco mayores empresas farmacéuticas del mundo equivale al doble del PBI combinado de toda el África sub-sahariana.

Pfizer es uno de los actores principales de la industria farmacéutica, que está considerada como el grupo de presión industrial más influyente en Washington. En el año 2000 esa compañía gastó U$S 3.4 millones en cabildeo directo al gobierno de Estados Unidos, y Pharmacia, la empresa con la que Pfizer luego se fusionó, gastó U$S 3.7 millones. Pfizer tiene acceso bastante directo a decisores clave de la OMC: el director ejecutivo de Pfizer, Henry McKinnell, se reunió en el Foro Económico Mundial del 2003 en Davos, Suiza, con el Director General de la OMC Supachai Panitchpakdi y el Ministro Sudafricano de Comercio e Industria Alec Erwin para negociar una "solución" al tema del acceso a los medicamentos.

Pfizer es además un actor clave en PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America), el todopoderoso grupo de presión de la industria farmacéutica estadounidense que gastó U$S 7.4 millones cabildeando al gobierno de los Estados Unidos en el año 2000. Henry McKinnell, director ejecutivo de Pfizer, fue presidente de la junta directiva de PhRMA en 2001 y 2002 y oficia actualmente como co-presidente de la US Business Rountable (mesa nacional de empresarios estadounidenses) y es miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

No por casualidad estuvieron Pfizer y PhRMA estrechamente vinculadas a la redacción del acuerdo sobre los ADPIC. Como expresara el director ejecutivo de Pfizer, Edmund Pratt: "Nuestro esfuerzo combinado nos permitió establecer una red global público-privada que sentó las bases para aquello que luego se convirtió en el acuerdo sobre los ADPIC". La posición del gobierno de Estados Unidos que a la postre constituyó la base del acuerdo sobre los ADPIC era en verdad sorprendentemente semejante a las propuestas de los grupos de presión de la industria farmacéutica.

Los beneficiarios de este acuerdo son hasta ahora indiscutiblemente las empresas farmacéuticas transnacionales que han conseguido modelar a su antojo las políticas de la OMC en virtud de su influencia en Washington y Ginebra. Sin embargo, la tragedia silenciosa es que millones de personas en los países empobrecidos siguen sufriendo innecesariamente debido a que no tienen acceso a medicamentos asequibles.

más información:
Campaña por Acceso a Medicamentos Esenciales, Médicos Sin Fronteras: ***www.accessmed-msf.org/index.asp***
"Formula for Fairness: Patient Rights Before Patent Rights", Oxfam America: ***www.oxfamamerica.org/publications/art793.html***
The Centre for Public Integrity: ***www.opensecrets.org***

"Estoy cansado de la lógica que dice: 'Aquel que no puede pagar, muere'"

Dr. James Orbinski, Presidente Internacional de Médicos Sin Fronteras/ Doctors Without Borders/ Médecins Sans Frontières.

la shell trae el infierno a méxico

tratado de inversiones en la omc amenaza a las comunidades

En 2002, el gigante petrolero Shell anunció los planes de construcción de una nueva y gigantesca planta de gas en un ecosistema marino delicado en Costa Azul, México. Los residentes locales se oponen al proyecto debido al severo impacto ambiental y social que se prevé. Este proyecto no es más que una de las muchas invasiones inesperadas de este tipo, frente a las cuales las comunidades muy difícilmente podrán hacer nada si en Cancún se aprueba negociar un tratado de inversiones en la OMC. Shell es solamente una de las empresas, muchas de las cuales están agrupadas en la influyente Cámara Internacional de Comercio (ICC), que se beneficiarán con este nuevo régimen de inversiones.

Shell Gas and Power anunció en 2002 un plan de U$S 500 millones para construir una enorme planta de gas natural licuado (LNG, por su sigla en inglés) en la prístina franja costera de Baja California, México. El proyecto es construir una terminal receptora y de regasificación, un puerto y gasoductos (uno de los cuales tendrá 200 kilómetros de extensión) cerca de las instalaciones turísticas de Bajamar. La mayor parte del gas que allí se produzca será seguramente exportado a la cercana California, hambrienta de energía.

Costa Azul es una de las últimas zonas silvestres de la costa de Baja California –un área caracterizada por su flora y fauna excepcional, así como por la población de ballenas grises que nadan desde Alaska para parir en las tibias aguas del Golfo de California. Instalando una planta de gas natural licuado en esa ubicación, la Shell no sólo amenaza con obstruir la ruta de las ballenas, sino que también genera riesgo de colisiones entre buques y ballenas.

Hay cerca de 5,000 pobladores locales que trabajan en la industria turística todo a lo largo de esta costa. Una planta de gas natural licuado tan cerca de las instalaciones turísticas constituye un peligro potencial que amenaza con arrasar sus puestos de trabajo, sus fuentes de sustento y sus pequeños negocios. Shell no ha ofrecido compensación alguna por la pérdida potencial de ingresos derivados del turismo, y su inversión generará muy poco empleo. La población local propuso una alternativa económicamente viable que emplazaría el gasoducto más lejos de la costa y mantendría libres las rutas migratorias de las ballenas. No obstante, Shell sigue decidida a llevar a cabo su plan inicial.

Ballena gris.

Como en el caso del AMI, la Comisión ha buscado explícitamente involucrar a los empresarios industriales en el diseño de sus propuestas para un acuerdo de inversiones. En 1999 y el 2000, la Comisión Europea llevo a cabo una encuesta exhaustiva entre 10,000 empresas importantes de la Unión Europea para conocer sus aspiraciones al respecto de un acuerdo de inversiones en la OMC. La Comisión también apoyó la "Investment Network" (red de inversiones), un organismo con fuerte presencia empresarial que ella misma creó –a todas luces para conseguir apoyo directo de los altos ejecutivos de las empresas, en su campaña por un acuerdo de inversiones en la OMC.

La Cámara Internacional de Comercio (ICC) –el peso pesado entre los grupos de presión empresarial corporativa, partidario y promotor de primera línea del fallido AMI e integrado por empresas tales como Shell, Unilever, BASF, Nestlé, Norsk Hydro y BP—es uno de los puntos de apoyo más fuertes con que cuenta la Unión Europea dentro del ámbito empresarial para su estrategia en favor de un acuerdo de inversiones en la OMC. En ese mundo empresarial, la ICC cuenta con vías de acceso incomparables a todos los niveles de gobierno, así como una gran influencia en la OMC. Como plantea Stefano Bertasi, antiguo presidente del Grupo de Trabajo de la ICC sobre Comercio e Inversiones, "Siempre hemos tenido, a lo largo de todos estos años, una relación de trabajo muy cercana con la OMC, porque ellos obviamente abordan temas que son centrales para los intereses empresariales. La ICC siempre ha sido un vector de influencia empresarial en los trabajos de la OMC".

Existe una puerta a vaivén entre la ICC y la OMC que cimienta un flujo permanente de ideas e influencias. Lars Anell, presidente actual del Comité de Comercio e Inversiones de la ICC, fue presidente del Consejo

Playa en Costa Azul.

acuerdo de inversiones pone en riesgo a las comunidades

En 1998 un alzamiento de la sociedad civil consiguió hundir el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) propuesto por la OCDE. Sin embargo, esta victoria para los pueblos y el medio ambiente tan ampliamente celebrada puede ser apenas provisoria, ya que la propuesta de un acuerdo de inversiones en la OMC constituye otro intento más para establecer una declaración universal de derechos para las grandes empresas transnacionales. Asociado al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, mejor conocido como GATS por su sigla en inglés) que se viene negociando en la OMC, el acuerdo de inversiones propuesto cedería a las empresas transnacionales derechos aún más amplios para invertir dónde y cuándo les plazca.

Los grupos de presión empresarial europeos están actuando codo a codo con la Comisión Europea para forzar la introducción del tema inversiones al programa de trabajo de la OMC. Haciendo eco a los reclamos de los grupos de cabildeo empresariales, la Comisión adorna sus argumentos en favor de un acuerdo de inversiones en la OMC con una inmensa cantidad de retórica "pro desarrollo". No obstante, la gran mayoría de los países en desarrollo se opone a un acuerdo de inversiones en la OMC. Eso es comprensible, ya que incluso el acuerdo más elemental en esa materia erosionaría el derecho de las comunidades a regular el ingreso y desempeño de los inversionistas extranjeros.

del GATT (el antecesor de la OMC) entre 1986 y 1992. Arthur Dunkel, otrora presidente del Comité de Comercio e Inversiones de la ICC, fue Director General del GATT durante la Ronda Uruguay.

El rasgo central de un acuerdo de inversiones será mayor acceso a todos los países para los inversionistas, y menor reglamentación de control gubernamental para sus inversiones. Aún no está claramente definida la forma final que tendría el acuerdo, pero todo parece indicar que un acuerdo de inversiones de gran envergadura como el que reclaman las grandes empresas y sus grupos de presión podría: brindarle a los inversionistas grados significativamente mayores de protección jurídica; incluir mecanismos a través de los cuales los inversionistas mismos podrán impugnar judicialmente las leyes y normas gubernamentales y reclamar indemnización; y exigir que las empresas inversionistas extranjeras reciban el mismo trato que las empresas locales. Además, el acuerdo muy probablemente tornaría irreversibles para siempre las medidas de liberalización, y eliminaría los denominados requisitos de desempeño –cuyo propósito es compartir con la población local algunos de los beneficios y empleos creados a través de la inversión—para los inversionistas extranjeros.

Para las empresas como Shell, un acuerdo de inversión como el que está a discusión en la OMC sería liberador. Para las comunidades de Costa Azul, México, y de muchos otros lugares en todo el mundo, mayores derechos para los inversionistas y las empresas seguramente acarrearán innumerables desgracias sociales y ambientales.

Manifestantes protestando frente al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en febrero de 2003, contra los intentos del gobierno estadounidense de sabotear las negociaciones del Convenio Marco sobre Control del Tabaco.

tratado tóxico

las lecciones del tlcan/nafta

Bajo las reglas de inversión del Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN/NAFTA), hay normas ambientales y de interés público que han sido exitosamente impugnadas por interferir con los intereses comerciales de los inversionistas transnacionales. Philip Morris, la gigantesca empresa transnacional tabacalera y agroindustrial, es una de las compañías que ha utilizado la amenaza de entablar una demanda amparada en el Capítulo 11 del TLCAN/NAFTA, con el fin de proteger sus intereses comerciales. Philip Morris mantiene vínculos muy estrechos con el poderoso grupo de presión que aboga celosamente en favor de la inversión capitalista, y en virtud de su alcance mundial, esa empresa también podría beneficiarse enormemente con un acuerdo de inversiones en la OMC.

tribunal tóxico: metalclad vs. méxico

En un caso dramático que revela cómo el TLCAN/NAFTA erosiona a las comunidades locales, México perdió en una demanda amparada en el Capítulo 11 y fue sentenciado a pagar cerca de U$S 16 millones a Metalclad, una empresa estadounidense, después que la comunidad local de San Luis Potosí se negara a permitir el funcionamiento de un vertedero de desechos peligrosos en su entorno. El tribunal internacional que actuó en el caso dictaminó que el establecimiento de una reserva ecológica en la zona donde estaba ubicado el vertedero de desechos peligrosos equivalía a una "expropiación" de la inversión de la empresa en dicho lugar, y que violaba las disposiciones del Capítulo 11. El tribunal llegó a esa conclusión aun cuando la comunidad había manifestado gran preocupación por los impactos potenciales adversos de esa actividad en el medio ambiente circundante.

comercio tóxico: libre tráfico de pcb

En otro claro ejemplo, Canadá perdió un caso presentado por una compañía estadounidense que impugnó la prohibición canadiense a la exportación de PCB altamente tóxico. El tribunal dictaminó que Canadá había violado las disposiciones de "trato nacional" previstas en el Capítulo 11 –cláusulas supuestamente benignas que prohíben la discriminación de los inversionistas de otros países—aunque reconoció al mismo tiempo que Canadá había obrado razonablemente en cumplimiento de sus obligaciones bajo el Convenio de Basilea relativo al transporte transfronterizo de desechos peligrosos. En virtud del Convenio de Basilea, los países están obligados a restringir el comercio de desechos peligrosos y a promover el tratamiento y la eliminación de los desechos en su propio territorio nacional, en lugar que en países extranjeros. Aun así, el tribunal decretó que la prohibición de exportación de PCB no era admisible porque Canadá debía haber aplicado enfoques alternativos aparentemente "menos restrictivos del comercio".

un tribunal internacional. Canadá propuso esa prohibición a finales del 2001, en respuesta al consenso expresado por los expertos en salud pública con respecto a que las descripciones "mild" y "light" son fundamentalmente engañosas y que los cigarrillos así etiquetados no son menos dañinos para la salud de los fumadores, en parte porque los fumadores compensan la concentración menor de nicotina inhalando más profundamente.

No obstante, Philip Morris alegó que dicha regulación aplicada a los cigarrillos equivaldría a una "expropiación" de su inversión en Canadá, porque "light" y "mild" son términos usados en las marcas registradas de la compañía. La empresa sostiene que según las reglas de inversión del TLCAN/NAFTA, Canadá no podría emprender las acciones que tenía contemplado tomar para proteger la salud pública. Aunque Philip Morris todavía no ha entablado la demanda contra Canadá amparándose en el Capítulo 11, es evidente que si ha estado utilizando las reglas de inversión para forzar cambios en el proceso de formulación y decisión de las políticas públicas en Canadá.

Como empresa tabacalera de verdadero alcance mundial con marcas registradas que se venden en 160 países, Philip Morris se beneficiaría enormemente con un acuerdo de inversiones en la OMC. Previéndose que el tabaco matará 10 millones de personas de aquí al 2030, es sumamente inquietante ver el poder y la fuerza que le daría a una empresa multinacional como Philip Morris un acuerdo multilateral de inversiones que abarcaría 148 países.

Philip Morris es miembro del Consejo de Comercio Internacional de los Estados Unidos (US Council of International Business – USCIB), que es el capítulo estadounidense de la Cámara Internacional de Comercio (ICC). La ICC es promotor de primera línea de un acuerdo de inversiones en la OMC. El USCIB está presionando para que el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) adopte el mismo tipo de protecciones y derechos para los

disuasión regulatoria, philip morris y tlcan/nafta

Contra el telón de fondo de estas impugnaciones al interés público amparadas en el Capítulo 11, Philip Morris utilizó las reglas de inversión del TLCAN/NAFTA para amenazar a Canadá en una controversia en torno a las normas de empaque de los cigarrillos. Este caso demuestra cómo los acuerdos de libre comercio como el TLCAN/NAFTA y la OMC, que están dotados con mecanismos de solución de diferencias poderosos, pueden tener un "efecto disuasorio" con respecto a las reglamentaciones en materia de salud y medio ambiente, ya que pueden atemorizar a los gobiernos e inducirlos a no atreverse siquiera a correr el riesgo de contravenir o desobedecer las reglas del comercio.

En su alegato formal, Philip Morris advirtió al gobierno de Canadá que una prohibición al empleo de los términos "light" y "mild" constituía una violación del Capítulo 11 –amenazando implícitamente impugnarla ante inversionistas que ya contempla el TLCAN/NAFTA, incluso sus poderosas cláusulas relativas al concepto de expropiación, y también aquellas que habilitan a las empresas mismas a demandar judicialmente a los Estados, como efectivamente lo hizo Metalclad contra México con bastante éxito.

Tratándose de Philip Morris, los beneficios de obtener mayor acceso a los mercados en todo el mundo mediante un acuerdo de inversiones en la OMC –e incluso mediante acuerdos regionales de comercio como el ALCA—se extienden mucho más allá del ámbito del tabaco. La casa matriz de Philip Morris, Altria, es de hecho sólo un nuevo nombre para este conglomerado tabacalero que es en realidad una empresa multifacética que incluye otras del sector alimentario como Kraft Foods, uno de los mayores usuarios de ingredientes transgénicos en el mundo. ¿Es acaso esto lo que el mundo necesita: más cigarrillos Marlboro y más tacos de maíz potencialmente contaminados con transgénicos?

Manifestaciones de protesta contra la privatización del agua en Cochabamba, Bolivia.

maremoto en la omc

las transnacionales del agua quieren ahogar los intereses nacionales

El agua es un gran negocio. Las gigantescas empresas que dominan la industria del agua –entre ellas las europeas Suez y Vivendi- encabezan la iniciativa de utilizar el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, mejor conocido como GATS por su sigla en inglés) de la OMC para promover mayor intervención del sector privado en la industria del agua y tornar 'irreversibles' para siempre las privatizaciones previas. Para la industria del agua esto significará más mercados y mayores ganancias, pero las consecuencias para las comunidades y el medio ambiente son bastante más turbias.

el gats/agcs y el agua

El acuerdo de la OMC sobre servicios (GATS/AGCS) es una pieza importante y necesaria para completar el rompecabezas de la Suez y otras grandes empresas del agua, ya que presionará a los países a abrir y entregar parcelas importantes de sus servicios de agua a las trasnacionales del agua. El GATS/AGCS además tornará prácticamente irreversibles muchos de los esquemas actuales de privatización del agua, haciendo caso omiso de cualesquier problemas asociados que puedan conllevar. Los gobiernos futuros se verán seriamente restringidos en sus posibilidades para retomar en sus manos los servicios de agua privatizados a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad.

Las grandes empresas del agua tienen gran interés en inducir a los gobiernos a cerrar contratos de privatización que no les impidan a aquellas abandonar el barco si disminuyen las ganancias, pero que sí le dificulten la tarea a los gobiernos en caso que estos quieran interrumpir o declarar nulos los acuerdos previamente contraídos. No obstante, en lo últimos años algunos gobiernos han declarado nulos varios contratos y concesiones privadas de agua, cediendo a la presión de protestas populares generalizadas a raíz del incremento de las tarifas y el deterioro de los servicios. El caso más conocido es el de Cochabamba, Bolivia: tras la privatización, las tarifas de agua se incrementaron en un 150% y la empresa, una subsidiaria de Bechtel, amenazó con cortar del servicio a aquellos clientes que no pudiesen pagar. Eso provocó una rebelión popular que obligó al gobierno a cancelar el contrato de privatización en el 2000. De manera semejante, en el 2003 el Consejo Municipal de la ciudad de

Atlanta, Estados Unidos, declaró nulo su contrato de 20 años con una subsidiaria de Suez "tras denuncias generalizadas de servicio deficiente y aguas sucias". En realidad, por todo el mundo están estallando focos de insatisfacción y descontento con los esquemas privatizadores, como es el caso en países como Argentina, Sudáfrica, Australia, Uruguay y las Filipinas.

tentáculos vinculantes

La participación activa de Suez en una amplia red de grupos de presión empresariales le asegura excelentes oportunidades de acceso a decisores clave del mundo globalizado. Esa compañía integra todos los principales grupos de presión del ámbito comercial, entre ellos la Cámara Internacional de Comercio (ICC), el Diálogo Comercial Transatlántico (Transatlantic Business Dialogue-TABD), el Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD) y la Mesa Redonda de Industriales Europeos (European Rountable of Industrialists – ERT). También es miembro del Foro Europeo de Servicios (European Services Forum - ESF), un grupo de presión empresarial enfocado principalmente en el GATS/AGCS.

Corporate Europe Observatory (observatorio de empresas europeas) ha utilizado las "solicitudes de acceso a la información" oficiales para estudiar la estructura vincular privilegiada que ha surgido entre el ESF y el equipo 'GATS/AGCS 2000' de la Comisión Europea. En octubre de 2001, la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea solicitó asesoría del ESF con respecto al proceso de solicitudes de acceso a los mercados de servicios en el marco de las negociaciones del GATS/AGCS en curso: "Acogeríamos con mucho agrado los aportes de la industria en este ejercicio, tanto para informarnos acerca de dónde residen los problemas como para presentar solicitudes específicas. Sin los aportes del ESF corremos el riesgo que el ejercicio se convierta en uno puramente intelectual". Más tarde, un funcionario de comercio de la Comisión le manifestó su gratitud a los gigantes del agua Thames, Suez y Vivendi por su contribución a la reducción de las barreras comerciales con vistas a la apertura de mercados para las compañías europeas.

La relación privilegiada del ESF con la Unión Europea no es ninguna sorpresa, ya que ese organismo fue creado por iniciativa del entonces Comisionado de Comercio de la Unión Europea, Sir Leon Brittan. La fuerza de ese vínculo se puso de manifiesto en septiembre de 1999 cuando Robert Madelin, un alto funcionario de comercio de la Comisión, se expresó así ante un auditorio de empresarios del Reino Unido: "La Comisión Europea está convencida de la necesidad de trabajar no sólo con los expertos de los Estados miembros sino directamente con la industria europea. Vamos a apoyarnos fuertemente en el Foro Europeo de Servicios (ESF) [...] Al formular nuestros objetivos vamos a apoyarnos tan fuertemente en sus consejos como en la asesoría directa de los Estados miembros."

suez y los grupos de presión mundiales en materia de agua

Suez también ocupa un lugar central en la serie de grupos internacionales de expertos y gabinetes de estrategia, comisiones consultivas y foros internacionales que han dominado el debate sobre el agua y que han instalado las privatizaciones como solución predominante frente a los problemas de agua en el mundo. Suez es miembro influyente del Consejo Mundial del Agua, un gabinete de expertos en agua de primera línea que asesora al Banco Mundial y a la OMC. Jérome Monod, un ex director ejecutivo de Suez, es miembro de la Comisión Mundial del Agua para el siglo XXI, un organismo élite de sensibilización pública y formulación de políticas globales al más alto nivel.

Comparando la calidad del agua en Uruguay.

agua privada en uruguay: una experiencia calamitosa

Aguas de la Costa, una subsidiaria de Suez que opera una concesión de agua en el departamento de Maldonado, Uruguay, es un ejemplo claro de una privatización que no funcionó. Según María Selva Ortiz, de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay: "La concesión de Aguas de la Costa resultó en un incremento enorme de las tarifas. La tasa fija que se cobra en casi todo el país por el servicio público de agua equivale a U$S 3, pero Suez cobra U$S 70 sólo por abrir el grifo. Gracias a las presiones que ejerció sobre el gobierno municipal de Maldonado, Suez consiguió que todos los habitantes de la zona estén obligados a conectarse a sus servicios."

Suez también ha provocado graves daños ambientales en la zona en donde opera. Según María Selva Ortiz: "Siempre se sacó agua de la Laguna Blanca para cubrir las necesidades de la población local, pero poco tiempo después que Suez entrara en escena para hacerse cargo de los servicios de agua, el lago se secó debido a que la empresa lo sobre-explotaba.

Cuando una escuela pública local no pudo pagar las altísimas tarifas fijadas por Suez, le cortaron el agua. Cuando un vecino de la zona le instaló una conexión de agua provisoria a la escuela desde su casa, la empresa le cortó el suministro también a él. Según Selva Ortiz: "Esto contrasta fuertemente con lo que nos mostró un panel de empresas europeas durante el Tercer Foro Mundial del Agua en Kyoto, Japón, donde presenciamos un video con hermosas imágenes acerca del compromiso de las empresas del agua con la educación y los niños del mundo. Estas imágenes fueron claramente propaganda de relaciones públicas, ya que las empresas como Suez sólo están interesadas en multiplicar sus ganancias."

Haciendo caso omiso de estos problemas, el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo están presionando ahora fuertemente para ampliar la experiencia privatizadora a todo el país. Sin embargo, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida en la cual participa activamente Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, está impulsando una Reforma Constitucional que garantizaría el acceso universal al agua para toda la población del país y el manejo sustentable de los recursos hídricos, asegurando a su vez la propiedad y gestión pública del recurso y los servicios.

más información:
"The Water Barons", International Consortium of Investigative Journalists: ***www.icij.org/dtaweb/water***
"WTO and Water: The EU's Crusade for Corporate Expansion", Corporate Europe Observatory Water Info Brief:
www.corporateeurope.org/water/infobrief3.htm

¿qué es el gats/agcs?

Las negociaciones actuales de la OMC sobre la liberalización de los servicios, denominadas como Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, mejor conocido como GATS por su sigla en inglés), son una compleja serie de discusiones acerca de cómo eliminar los obstáculos para el comercio de servicios. Los servicios se han descrito como cualquier cosa que no puedes dejar caer sobre tus pies: distribución y transporte, radiodifusión y las artes, suministro de agua, energía y educación, y muchos más –la OMC enumera más de 150 áreas en total. El GATS/AGCS reducirá el margen que tienen los gobiernos para decidir quién y cómo presta servicios, y restringirá su capacidad para priorizar metas tales como equidad, asequibilidad, y sustentabilidad ambiental en la prestación de los servicios.

Manifestaciones durante la reunión de Ministros de Comercio de la Unión Europea en Palermo, Italia, en julio de 2003 (izquierda) y durante una reunión del Foro Europeo de Servicios en marzo de 2003 en Bruselas.

Entre los problemas que presenta el GATS/AGCS se destacan:

más privilegios a cambio de ninguna obligación para las grandes empresas: el GATS/AGCS tiene que ver fundamentalmente con la apertura de nuevos mercados para las empresas transnacionales –tanto en nuevos países, como en nuevos sectores como el agua. Tal y como reza en el sitio en la Internet de la Comisión Europea dedicado al GATS/AGCS: "el GATS/AGCS no es solamente un acuerdo que existe entre los gobiernos. Es fundamentalmente y en primer lugar un instrumento para beneficio de las empresas."

demasiado amplio y demasiado veloz: las negociaciones del GATS/AGCS pretenden abarcar demasiadas áreas y sectores en demasiado poco tiempo. Eso le da ventajas a los países ricos, que tienen la capacidad de manejarse con negociaciones rápidas y complejas. La velocidad de las negociaciones también impide que haya consultas e intervención pública genuinas.

obligatorio e irreversible: el GATS/AGCS compromete efectivamente a los gobiernos futuros, independientemente de los posibles cambios de enfoque político, avances tecnológicos o nueva información disponible. Los gobiernos disponen únicamente de una oportunidad para estipular qué áreas de un sector determinado no están contempladas en su lista de compromisos específicos, y una vez hecho esto, es sumamente difícil revertir los compromisos.

espejo de la disfuncionalidad de la omc: el GATS/AGCS es reflejo fiel de los muchos problemas de la OMC (entre otros, su fundamento en teorías económicas equivocadas), tales como la sistemática exclusión de los enfoques y perspectivas de muchos países en desarrollo mediante procesos de negociación excluyentes y antidemocráticos; y el poder estructural sobredimensionado del grupo de países conocido como el 'Quad' (Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá).

Algunos de los impactos específicos del GATS/AGCS podrían ser, entre otros, la desaparición de servicios públicos esenciales como el suministro de agua potable y saneamiento (acueductos y alcantarillado), o tarifas más altas de servicio; precios más caros en el transporte público; y mayores impactos sociales y ambientales derivados del crecimiento de la industria turística de masas y una regulación menos eficaz del turismo.

La ronda más reciente de negociaciones del GATS/AGCS, conocida como GATS/AGCS 2000, opera a través de una serie de negociaciones en las cuales los países solicitan de otros países la liberalización y a cambio ofrecen la liberalización de sectores específicos de sus propios servicios. Luego de las solicitudes y ofertas iniciales, los miembros de la OMC entran en negociaciones bilaterales para llegar a acuerdos acerca del grado de liberalización. Paralelamente a este proceso de solicitudes y ofertas, el GATS/AGCS también abarca negociaciones en torno a nuevas reglas que podrían llegar a aplicarse a todos los sectores de servicios por igual, independientemente de que los países hayan liberalizado o no todos los sectores de servicios según el GATS/AGCS. El plazo fijado para completar esas negociaciones vence el 1e de enero de 2005. Sin embargo, las negociaciones no están avanzando bien, ya que hasta junio de 2003 solamente un 18% de los países de la OMC había presentado sus solicitudes.

Amigos de la Tierra Internacional (FoEI) y Corporate Europe Observatory (CEO) estiman que las negociaciones del GATS/AGCS afectarán adversamente las formas de control comunitario de los servicios sociales esenciales y restringirán el espacio y la capacidad regulatoria doméstica en materia ambiental. En lugar de forzar el avance de las negociaciones del GATS/AGCS, consideramos que se debe aplicar una moratoria a futuras liberalizaciones, e iniciar en su lugar una evaluación exhaustiva e independiente de las consecuencias sociales y ambientales del GATS/AGCS.

más información:
Observatorio del GATS/AGCS (GATS Watch): ***www.gatswatch.org***
Amigos de la Tierra de Inglaterra/Gales e Irlanda del Norte: ***www.foe.co.uk***
'Winners and Losers', FoEI, 2003: ***www.foei.org/cancun***

Manifestación en contra de la privatización de la energía en Colombia.

dejan a oscuras al pueblo

el gats/agcs y la privatización de la energía

Los sectores populares de Bogotá, Colombia, están experimentando los efectos adversos de un sistema de energía privatizado en manos de la empresa transnacional española Endesa. La privatización inicial tuvo lugar luego que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional así lo aconsejaran. Ahora el acuerdo GATS/AGCS de la OMC seguramente vendrá a completar la entrega del preciado regalo, permitiendo la expansión de Endesa e 'irreversibilizando' este fallido experimento de privatización de la energía.

Cuando se privatizó parcialmente la electricidad en 1998, las reglamentaciones locales impidieron que Endesa tomara el control total de las empresas recién privatizadas. Sin embargo, desde entonces y a través de diversos mecanismos administrativos, Endesa consiguió apoderarse de la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica en Bogotá.

Tras el 'golpe' energético de Endesa en Bogotá se han registrado casos de incrementos de tarifas muy llamativos y numerosos ejemplos de favoritismo comercial. En conjunto, la situación está generando serias tensiones sociales, especialmente en los barrios más empobrecidos de la ciudad.

En algunos casos, por ejemplo, los precios de la electricidad para consumo doméstico se incrementaron en un 500% con relación al costo promedio. También ha habido casos de suspensión arbitraria del servicio de electricidad a hogares, hospitales públicos y centros comunales. Las políticas agresivas y excluyentes que exhibe Endesa en las zonas más deprimidas de la ciudad contrastan agudamente con la imagen benevolente que la compañía presenta en los vecindarios con mejor poder adquisitivo, donde lanzó planes de financiación y descuentos para la compra de electrodomésticos. Los trabajadores de la energía también salieron duramente golpeados del proceso de privatización. De un total de unos 1,750 empleados, hubo cerca de un 40% que dejaron su trabajo tanto de forma voluntaria como forzada luego de la privatización, y las nuevas vacantes fueron subcontratadas bajo pésimas condiciones de empleo.

Al considerar temas de este tipo en el contexto colombiano es necesario recordar la historia de abusos a los derechos humanos que tiene ese país contra activistas gremiales y comunitarios. Desde 1998, 27 funcionarios del sector fueron asesinados, 7 fueron forzados a dejar sus trabajos y 230 recibieron amenazas de diversa índole.

la influencia de endesa

Endesa es la tercera empresa energética más importante del mundo y desempeña un papel preponderante en el suministro de servicios eléctricos en América Latina en países y ciudades tales como Buenos Aires, Lima, Sao Paulo y Chile. La compañía es parte de un conglomerado español con actividades en el área financiera y los sectores del gas, electricidad y petróleo. Ha sido influyente en las negociaciones multilaterales de liberalización y ha intervenido en las campañas por la privatización de la energía y las compañías financieras, especialmente en América Latina. La empresa goza de una posición influyente en el grupo de presión energético europeo. Rafael Miranda Robredo, director ejecutivo del Grupo Endesa, es también Vicepresidente de Euroelectric, el grupo de presión europeo de las empresas de electricidad. Euroelectric es el único grupo de presión empresarial del sector energético que participa en el Foro Europeo de Servicios (ESF), un influyente grupo de cabildeo pro liberalización. Tal y como señala Corporate Europe Observatory, el ESF ocupa una posición especialmente privilegiada en las negociaciones del GATS/AGCS en Europa.

El potencial del GATS/AGCS como instrumento para ampliar y tornar irreversibles los programas de liberalización iniciados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, tales como la privatización de la energía en Bogotá, es sin lugar a dudas uno de los motivos por los cuales los Estados Unidos y la Comisión Europea promueven tan enérgicamente el GATS/AGCS.

Colombia aún tiene que presentar sus ofertas de liberalización de servicios con arreglo a las negociaciones del GATS/AGCS 2000, pero existen presiones para que este país entregue todo su mercado eléctrico doméstico a la liberalización. La Comisión Europea, por ejemplo, le solicitó a Colombia acceso pleno al mercado en 'servicios vinculados con la distribución de energía' y compromisos plenos en el comercio de productos energéticos.

El GATS/AGCS seguramente abrirá nuevas esferas de liberalización para los miembros del ESF y empresas asociadas como Endesa, y les garantizará enormes ganancias irreversibles, independientemente de las consecuencias sociales o ambientales. Por contraste, el GATS/AGCS retirará los servicios esenciales aún más lejos del alcance de la gente común, como en el caso de los habitantes de Bogotá.

Lucha de la cuerda en el Reino Unido en marzo de 2003, instigada por la OMC.

Niños Machiguenga de la comunidad de Timpia en el Perú, una de las comunidades afectadas directamente por el gasoducto de Camisea en el que participa Halliburton (arriba izquierda); servidumbre de paso para el gasoducto (abajo izquierda); vivienda tradicional Machiguenga a orillas del río Bajo Urubamba, Perú (centro).

ganancias a chorros

el gats/agcs es buena noticia para las empresas mundiales como halliburton

Halliburton, la gigantesca empresa estadounidense de energía, tiene la posibilidad de cosechar impresionantes ganancias de la liberalización de los servicios, tanto bajo el acuerdo GATS/AGCS de la OMC como en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La influencia de Halliburton en las negociaciones del GATS/AGCS a través de sus conexiones con la Coalición de Industrias de Servicios de los Estados Unidos (USCSI, por su sigla en inglés) –el peso pesado de los grupos de presión de la industria de servicios— está respaldada en sus estrechísimos vínculos con la Administración Bush.

Con ganancias anuales que superaron los U$S 13,000 millones en 2001 y 85,000 empleados en el mundo, Halliburton es un gigante de la industria de servicios petrolíferos. Sus operaciones en todo el globo –construcción y operación de pozos de petróleo, oleoductos, refinerías y plataformas de exportación- la convierten en la segunda compañía de servicios petrolíferos del mundo. Pero Halliburton es más que sólo una enorme potencia en la industria del petróleo. Sus prácticas comerciales han generado muchísima controversia, y la empresa ha sido acusada de daños ambientales y trato comercial con violadores de los derechos humanos. Halliburton se transformó además en el principal privilegiado de la contratación militar estadounidense con su megaproyecto de reconstrucción de la industria petrolera iraquí.

amistando con la omc

El tino de Halliburton para ganar influencia parece no haberse dañado por el hecho que su ex director ejecutivo, Dick Cheney, es ahora Vicepresidente de los Estados Unidos. Desde su posición como representante clave del sector energético en el Comité Consultivo Industrial de Servicios, adscrito a la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), Halliburton ha sido también uno de los actores más importantes del ámbito empresarial que presionan por la liberalización de los servicios energéticos bajo el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS/AGCS) de la OMC.

En 1999, las empresas de energía estadounidenses fundaron la Coalición de Servicios Energéticos (ESC, por su sigla en inglés) para promover las negociaciones del GATS/AGCS sobre energía. E. Joseph Hillings, Vicepresidente de Enron, y Donald A. Deline, un director de Halliburton, presidieron conjuntamente la coalición. Halliburton también es miembro de la Coalición de Industrias de Servicios de Estados Unidos (USCSI), el poderoso grupo de presión de la industria estadounidense de servicios.

La postura oficial del USTR en materia de servicios energéticos es casi un calco de las posiciones planteadas por la industria a través de la USCSI, entre ellas la propuesta de creación de una categoría del GATS/AGCS totalmente nueva que abarque todo el sector energético, desde la perforación de pozos y la construcción y operación de oleoductos, hasta la refinación de petróleo y la distribución de electricidad. Las negociaciones del GATS/AGCS en servicios energéticos podrían proporcionarle a las multinacionales extranjeras como Halliburton acceso significativamente ampliado a la industria petrolera de cualquier país que asumiera ese compromiso en las negociaciones.

El alarde de la USCSI, que reivindica haber "jugado un papel muy importante en el la formulación final" del acuerdo GATS/AGCS de la OMC, cuenta con el respaldo del Director General de la OMC, Dr. Supachai Panitchpakdi, quien manifestó que la USCSI "con su extensa red global de influencias en el mundo.... ha servido exitosamente para avanzar y afianzar los intereses de sus miembros, y lo que es más importante aún, para moldear las políticas de Estados Unidos y promover los intereses de ese país en los foros internacionales, garantizando así la liberalización progresiva del mercado mundial ."

Halliburton también ha estado implicada en relaciones comerciales con dictaduras corruptas y opresivas. El caso más notorio tuvo lugar en Birmania en la década de 1990, cuando la compañía y sus filiales prestaron servicios en dos controvertidos gasoductos, a pesar de las denuncias que acusaban a los militares birmanos de numerosas violaciones a los derechos humanos. Halliburton es también objeto de una investigación a manos de la Comisión de Valores (Securities and Exchange Commission-SEC) estadounidense, con relación a sus prácticas contables a fines de los '90, durante la presidencia de Cheney en la empresa.

lucrando con la guerra

Los vínculos estrechos de la empresa con la Administración Bush y las fuerzas militares de Estados Unidos también han sido motivo de controversia. La adjudicación reciente de un contrato del gobierno de Estados Unidos por valor de U$S 7,000 millones a la subsidiaria de Halliburton, Kellog Brown & Root (KBR) para la operación de los yacimientos petroleros de Irak estuvo sometida a intenso escrutinio público, especialmente en virtud de la relación de la compañía con el Vicepresidente Cheney. Halliburton "ganó" ese contrato sin que hubiera mediado siquiera una licitación publica, y se lo adjudicaron en vista de su capacidad para llevar a cabo un plan operativo para el ejército de los Estados Unidos, que la empresa elaboró a su propia medida.

controversia por camisea

Recientemente las actividades globales de Halliburton se extendieron a la participación en el proyecto Camisea, un proyecto gasífero sumamente destructivo que contempla extracción, gasoductos y exportación de gas atravesando áreas ecológicamente sensibles del Perú en un territorio habitado por Pueblos Indígenas. El proyecto de U$S 1,500 millones extraerá gas en la Reserva Nahua-Kugapakpri, destinada a proteger pueblos indígenas nómades que han tenido poco o ningún contacto con el mundo exterior. Halliburton es también la empresa que ha encabezado los planes de desarrollo de una terminal de exportación de gas en la zona de exclusión de Paracas, Perú, un área

Grúas extrayendo grandes cantidades de materiales para la construcción en las playas del río Urubamba a lo largo de la servidumbre de paso del oleoducto de Camisea en el Perú, agosto de 2002.

una historia sucia

Dotar a una empresa como Halliburton con mayores derechos para operar a nivel multinacional plantea muchos interrogantes, dados los antecedentes ambientales y sociales de la empresa. Halliburton admitió que una de sus filiales extranjeras le había pagado U$S 2.4 millones a una empresa de un funcionario del gobierno nigeriano en el 2002, a fin de conseguir para sí un trato impositivo preferencial. Ahora mismo, una investigación judicial francesa está examinando acusaciones que incriminan a Halliburton de haber participado en una operación masiva de sobornos asociados al desarrollo de un yacimiento de gas en Nigeria a fines de los '90.

protegida por la Convención de Ramsar sobre Humedales. El Secretariado de Ramsar se dirigió recientemente al gobierno de Perú y a algunos organismos financieros internacionales, alertándolos del hecho que el emplazamiento de una terminal de exportación en Paracas constituye una violación de la Convención. Aún así, Halliburton no desiste fácilmente de sus planes, y la compañía continúa buscando la concreción de su proyecto en éstas áreas prístinas a las que muchas personas llaman su hogar.

más información:
War Profiteers website: ***www.warprofiteers.com/***
"Enron-Style Corporate Crime and Privatization: A Look at the U.S. Coalition of Service Industries", ***www.polarisinstitute.org***

fotos tapa antoine bonsorte, amazon watch. tapa interior rod harbinson. página 3 mh concepts; greenpeace/gavilov. página 5 christopher black, international federation of red cross and red crescent societies; flip vorik, a seed europe. página 6 rainforest action network.página 7 tom kruse; foei. página 8 mh concepts. página 9 foe poland. página 10 bravo garcia/greenpeace. página 11 jens christiansen; genetically engineered food alert coalition. página 12 foei. página 13 foe england, wales and northern ireland. página 14 serge sibert/cosmos; juan carlos tomas/mst. página 15 roger job/mst. página 16 greenpeace/gavilov. página 17 friends of the the earth england, wales and northern ireland; border power plant working group. página 18 essential action, tatiana roa, censat/foe colombia. página 19 essential action. página 20 tatiana roa, censat/foe colombia; tom kruse. página 21 redes/foe uruguay. página 22: foe europe. página 24: sintraelecol nacional, colombia. página 25: foe england, wales and northern ireland. página 26 atossa soltani, amazon watch. adam goldstein; lily la torre lopez, racimos (centro). página 27 janet lloyd, amazon watch.

Publicado en agosto de 2003 en México y Uruguay.

www.foei.org/www.corporateeurope.org

Amigos de
la Tierra